

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE TRAMITE Y FALLO

El trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN se constituyó en audiencia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por el señor **JESÚS ARIEL CORRALES GONZÁLEZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-012-2017-00181-01, venido a esta instancia en consulta de la sentencia de primer grado en favor de COLPENSIONES.

AUTO

Se observa a folio 117, escrito mediante el cual, la abogada VICTORIA ANGÉLICA FOLLECO ERASO, invocando su calidad de representante legal de la firma de abogados RST ASOCIADOS PROJECT S.A.S, apoderada principal de COLPENSIONES, sustituye el poder a la dra. LEIDY JOHANA ROMÁN GUTIÉRREZ portadora de la TP. 315.568 del Consejo Superior de la Judicatura a quien se le confiere personería para representar los intereses de la entidad como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

A través del ejercicio de la presente acción ordinaria laboral, el demandante pretende el reconocimiento y pago de pensión de vejez en reemplazo de la pensión de invalidez que devenga y el pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, relata el actor en la demanda que el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín mediante sentencia de 2 de

septiembre de 2013 condenó a COLPENSIONES a pagarle la pensión de invalidez a partir del 24 de abril de 2009.

Que mediante Resolución VPB 3496 de 12 de agosto de 2013 se le reconoció pensión mensual vitalicia de vejez por incapacidad a partir de 24 de abril de 2009 con una mesada pensional para el 2013 de \$1.613.623 y un retroactivo de \$91.594.644

Afirma que el 20 de mayo de 2014 solicitó a la demandada el pago de la pensión de vejez prestación que le fue negada mediante Resolución GNR 409186 de 24 de noviembre de 2014 por habersele reconocido ya otra prestación económica la cual consideró incompatible.

Señala que el 6 de mayo de 2015 se solicitó ante la accionada el cumplimiento de la sentencia del Juzgado 13 laboral del Circuito de Medellín y mediante Resolución GNR 297176 de 26 de septiembre de 2015 se dio cumplimiento otorgándosele y un retroactivo pensional de \$4.371.539 por concepto de las diferencias económicas generadas entre las mesadas percibidas entre el reconocimiento inicial y el presente acto.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La oficina judicial de la primera instancia despachó de manera favorable la pretensión principal de la demanda y condenó a COLPENSIONES a pagarle al demandante la pensión de vejez desde el 24 de abril de 2014 y a cancelarle la suma de \$5.506.414 por concepto de retroactivo pensional, así como la indexación y facultó a COLPENSIONES para que efectuara los descuentos en salud del retroactivo pensional de la condena. Ordenó a COLPENSIONES continuar pagando a partir del 1º de abril de 2019 en el número de 13 mesadas pensionales al año en el monto de \$2.628.539 sin perjuicios de los incrementos de Ley.

Para fulminar la condena adujo el *a quo* que, aunque la posición sostenida por Colpensiones de no acceder a la pensión de vejez pretendida viene dada de que previamente y a través de proceso judicial se dispuso el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez al actor y que por tal razón, hay cosa juzgada, lo cierto es que en este caso no ha operado esta institución jurídica pues el objeto y la causa de los procesos son diferentes.

Expresó el juez, que, en el juzgado 13 se pretendía el reconocimiento de una pensión de invalidez de origen común fundada en el cumplimiento de los requisitos para acceder a esta prestación económica por tener la calidad de invalido mientras que

este proceso tiene un objetivo y una causa diferente, pues se busca que se proceda al reconocimiento de una pensión de vejez que se reclama bajo la conversión de una pensión de invalidez, es decir no se busca el reconocimiento simultaneo de las prestaciones, por lo tanto no se está en presencia de una cosa juzgada.

Consideró además el juez, que no es dable hablar de una conversión de pensión de invalidez a pensión de vejez, pues sería un cambio en la denominación y no en la forma en que se ha liquidado, de cara a lo establecido por el artículo 10 del Acuerdo 49 de 1990 que establece esta conversión sin importar si la persona ha completado los requisitos para acceder a una pensión de vejez norma que continúa siendo aplicada en virtud del artículo 31 de la ley 100 de 1993.

Indicó que la referida norma señala en su inciso final que la pensión de invalidez se convierte en vejez a partir del cumplimiento de la edad exigida para acceder a la pensión de vejez, es decir sin cumplir los requisitos lo que es diferente a lo pretendido en este proceso que se pide el pago de la pensión de vejez por cumplir los requisitos para acceder a ella.

Adujo que las personas que acceden a una pensión de invalidez no pueden excluirse de adquirir el derecho a la pensión de vejez, la cual es irrenunciable y que Colpensiones debía analizar si el demandante cumplía los requisitos para acceder a una pensión de vejez, y si los cumplía reconocerla y si era del caso suspender la pensión de invalidez por ser incompatibles.

Luego explicó los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición pensional del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y concluyó que el demandante es beneficiario de él por tener a 1º de abril de 1994 más de 15 años de servicios o cotizados, tenía 989 semanas para la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 por lo que la transición se extendió hasta el año 2014, en el que cumple 60 años de edad. Luego determinó que cumple los requisitos del decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y que además tiene derecho a una tasa de remplazo del 90% y el IBL del artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir el mismo que fue cuantificado por el juzgado 13 laboral del circuito de Medellín teniendo en cuenta que el análisis ya fue hecho por el juzgador como consta a folios 106 y que con posterioridad a esta sentencia no se hicieron cotizaciones posteriores pues la última se hizo en noviembre de 2012.

Señaló que el retiro del sistema general de pensiones del actor tuvo lugar el 15 de diciembre de 2012, por lo tanto, tiene derecho a disfrutar de la pensión de vejez desde que cumplió la edad, es decir desde el 24 de abril de 2014.

Luego estableció la diferencia entre la pensión de vejez ordenada en la sentencia y la invalidez que viene disfrutando el actor, teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año por no poderse hablar en este caso de una conversión de la pensión si no del reconocimiento de una prestación económica diferente, estableciendo un retroactivo total de \$5.506.414.

En cuanto a los intereses moratorios absolvió del pago de estos.

En contra de la anterior decisión no se presentaron recursos, motivo por el cual se dispuso el envío del expediente ante esta corporación judicial para surtir el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia en favor de Colpensiones.

3. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES presentó oportunamente escrito de alegaciones argumentando resumidamente que, habiéndose delimitado el problema jurídico a establecer si es procedente reconocer al demandante una pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición y bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta que mediante sentencia judicial emitida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín, se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, considero que existen materiales probatorios suficientes para demostrar que incluso antes de instaurarse la demanda por la prestación de invalidez, el actor le había solicitado a Colpensiones el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por deficiencia física y antes de emitirse el fallo en mención, la entidad tuvo a bien reconocer dicha prestación.

Como puede notarse en la Resolución VPB 3486 del 12 de agosto de 2013, Colpensiones dio trámite al recurso de apelación que presentó el apoderado de la parte demandante, solicitando que se diera aplicación al artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que permite anticipar el reconocimiento de la pensión de vejez a aquellas personas que habiendo cotizado 1000 semanas y tengan 55 o más años, presenten una deficiencia del 50% o más.

Y nótese que, atendiendo la fecha de estructuración de la invalidez del demandante, 26 de marzo de 2009, la Ley que inicialmente le era aplicable, es la 860 de 2003, que exige 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha en mención, mismas que el señor Jesús Ariel no cumplía por haber cesado el pago de sus cotizaciones en el año 2002. De modo que, no cumpliendo los requisitos de la pensión de invalidez, pero sí los de la pensión anticipada de vejez por deficiencia

física, síquica o sensorial, resulta desproporcionado invocar principios como el de la condición más beneficiosa y darles efectos retroactivos a normas que no le eran aplicables al demandante, como aparentemente ocurrió en la sentencia dictada por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín.

En ese orden de ideas y dando prevalencia a la justicia material, debe decirse que el demandante, como él mismo lo solicitó a la entidad vía recurso de apelación, fue beneficiario de la pensión anticipada de vejez por deficiencia y no había lugar ni siquiera a establecer si ésta le resultaba o no, más favorable que la pensión de invalidez, pues se insiste que con base en las normas que primigeniamente le eran aplicables, no le asistía derecho a dicha prestación.

Nótese, además, que el demandante nunca renunció al reconocimiento de la pensión anticipada por vejez, de ahí que, cuando la entidad dio cumplimiento al fallo judicial antes referido en el año 2015 a través de la Resolución GNR 297176 del 26 de septiembre de 2015, no ordenó el pago de las condenas allí establecidas, sino un reajuste conforme lo que ya le venía pagando al actor desde el año 2013.

Y bajo esas premisas, resultan acordes con el caso de autos las consideraciones emitidas por la Sala Segunda de Decisión Laboral en la sentencia dictada en el radicado 05001310500120170061201, en sentido que, quien accede a una pensión anticipada de vejez no puede pretender después, el reconocimiento de la pensión ordinaria de vejez. Esto dijo el Tribunal:

En ese orden de ideas, la persona que elige pensionarse bajo las condiciones propias de la pensión anticipada de vejez no puede con posterioridad a su reconocimiento, so pretexto de acceder a una mejor mesada pensional solicitar que le aplique otra norma, puesto que, tal proceder es contrario al principio de inescindibilidad o conglobamiento, que implica que una vez elegida una norma esta debe aplicarse de manera íntegra en relación la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido.

Por lo anterior señores Magistrados y en aras además, de salvaguardar la sostenibilidad financiera del régimen de prima media que administra Colpensiones, estimo que en el presente caso no era procedente reconocer al demandante la pensión de vejez bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, no obstante, en el evento de no atender mis consideraciones, solicito respetuosamente confirmar la absolución en materia de intereses moratorios en concordancia con lo manifestado en las sentencias SL 4338/19 CSJ, T-586-12 y Sentencia C-601-00, considerando

que son acertados los argumentos expresados por el Juez de primera instancia, en sentido que, al demandante nunca le fue suspendido el pago de sus mesadas pensionales y el efecto final de la sentencia, es un reajuste del valor que desde el 2014 viene percibiendo.

4. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer, si le asiste derecho al actor al cambio de la pensión de invalidez que actualmente viene recibiendo, por la pensión ordinaria de vejez, así como los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la consulta de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

5. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007, se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Respecto del derecho a la pensión pretendida por el actor, sea lo primero precisar que en el caso sub examine, se encuentra plenamente acreditado y no es objeto de debate, que a la fecha de presentación de la demanda el actor estaba percibiendo de COLPENSIONES pensión de invalidez otorgada mediante Resolución GNR 297116 de 26 de septiembre de 2015 (fls 28 a 30), la que se emitió dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado 13 laboral del Circuito de Medellín que condenó al pago de dicha pensión.

También está acreditado que COLPENSIONES antes de dar cumplimiento a la orden judicial había reconocido al actor pensión de anticipada de vejez por deficiencia física, psíquica o sensorial, pero finalmente esta prestación fue reemplaza por la de invalidez ordenada en sede judicial.

Igualmente se encuentra acreditado que el 20 de mayo de 2014 el demandante solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez, petición que fue contestada por parte de la entidad accionada de manera negativa mediante Resolución GNR 409186 de 24 de noviembre de 2014 (fol. 20)

Así las cosas, se hace necesario estudiar si el actor tiene derecho a la pensión ordinaria de vejez con base en el Decreto 758 de 1990, por ser o no beneficiario del régimen de transición.

Al respecto debe precisarse que, en virtud de la remisión normativa que se encuentra contenida en el artículo 31 de la ley 100 de 1993, y que indica que son aplicables al régimen de prima media con prestación definida, las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la ley, debe igualmente tener en cuenta el. Es así como el Art. 10 del Decreto 758 de 1990, establece lo siguiente:

Artículo 10. DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN. *La pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio.*

La pensión de invalidez por riesgo común se otorgará por períodos bienales, previo examen médico - laboral del ISS, al que el beneficiario deberá someterse en forma obligatoria, con el fin de que se pueda establecer que subsisten las condiciones que determinaron su otorgamiento.

La pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho.

Si se aplicara de manera exegética la anterior norma legal, el actor no tendría derecho a que se le estudie el derecho a reconocimiento de pensión de vejez por cumplir con el requisito de semanas cotizadas del Decreto 758 de 1990, sino que, al cumplir los 60 años, la pensión de invalidez que venía gozando muta a una de vejez en las mismas condiciones de la de invalidez que venía disfrutando.

Sin embargo, la norma antes referida resiste otra interpretación y es que a quien se le otorgue pensión de invalidez, y al cumplir los 60 años tenga además el requisito de semanas cotizada exigido para acceder a una pensión de vejez, puede renunciar a la pensión de invalidez para que se le otorgue la de vejez, interpretación que en virtud del principio de favorabilidad debe ser la que se aplique en este último caso.

En este punto, es necesario precisar, en cuanto a lo indicado por la apoderada de COLPENSIONES en sus alegatos de conclusión referente a que la entidad de seguridad social demandada reconoció inicialmente al actor pensión anticipada de vejez por deficiencia física psíquica o sensorial y por lo tanto no tiene derecho a la pensión ordinaria de vejez deprecada, no es posible acoger este argumento, pues el demandante en la actualidad no disfruta de una pensión anticipada por vejez, puesto

que si bien la demandada reconoce mediante la Resolución VPB 3486 de 12 de agosto de 2013 la referida pensión anticipada, posteriormente y en cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín que había otorgado la pensión de invalidez, mediante la Resolución GNR 297176 de 26 de septiembre de 2015, dio cumplimiento a la sentencia ya referida estableciendo que el derecho del actor correspondía a la pensión de invalidez, es decir que la pensión que actualmente y desde el 2015 devenga el actor, es la de invalidez y no la anticipada de vejez, y como se explicó es posible que el afiliado renuncie a la de invalidez para disfrutar la de vejez que es la que se pretende en este proceso.

En relación con lo anterior, tenemos que la 100 de 1993 estableció en su Art. 36 un régimen de transición, que respeta la aplicación de la normatividad que regulaba la pensión de vejez antes de entrar en vigor el nuevo sistema general de pensiones, con el fin de evitar el menoscabo de las expectativas legítimas de quienes se encontraban cercanos a acceder a la prestación económica por el cumplimiento de requisitos consagrados en ella.

De esa forma, los afiliados que a 1º de abril de 1994, contaran con 35 años si son mujeres o 40 años en el caso de los hombres, podrían acceder a la pensión de vejez en cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, en cuanto a edad, semanas de cotización y monto de la prestación económica, éste último consagrado en el artículo 20 de la misma disposición normativa.

El referido régimen de transición fue objeto de modificaciones con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, el que dispuso en su parágrafo transitorio 4to, que este terminaba el 31 de julio de 2010, dejando a salvo a quienes estando en dicho régimen, tuvieran a la fecha de su expedición (29 de Julio de 2005), 750 o más semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, a los que se les extiende el régimen de transición hasta el año 2014.

En el presente caso, el demandante a 1º de abril de 1994 contaba 989 semanas cotizadas lo que lo hace beneficiario del régimen de transición pensional por contar con más de 15 años de servicios o cotizados a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, contaba con 1.437 semanas cotizadas según da cuenta la historia laboral de fls. 76 a 78, lo que conlleva a concluir que conservó el derecho a la transición pensional hasta diciembre de 2014.

Es así, que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, otorga derecho a pensión de vejez al afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, que tenga cotizadas 500

semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para beneficiarse de la citada pensión o 1000 semanas en cualquier tiempo.

En el caso del demandante, revisado el reporte de semanas cotizadas, se puede constatar que registra un total de 1437 semanas cotizadas, es decir superó las 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo que exige el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 y que le es aplicable por transición, por lo tanto le asiste derecho a acceder al cambio de modalidad de pensión deprecada, debiéndose entonces confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto accedió a las súplicas de la demanda, reconociendo la pensión de vejez del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, respecto del monto de la pensión que se le otorgó al actor realizado por la Sala las operaciones aritméticas, no se encontró que tenga derecho a un monto de inferior al otorgado en primera instancia, por lo que se confirmará la sentencia del *a quo* en este aspecto. Igual ocurre con el retroactivo pensional otorgado, el que no se liquidó en monto superior al que tiene derecho el actor.

En lo referente a la excepción de prescripción de los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, formulada por Colpensiones, esta no tuvo operancia en el presente asunto, dado que la pensión de vejez fue solicitada el 20 de mayo de 2014, conforme al documento de folio 20 (suspendiendo con ello el término prescriptivo) y la demanda fue presentada el 16 de febrero de 2017 cómo se observa a folio 9, esto es, antes que se venciera el plazo de los 3 años a que hacen mención las normas antes referidas.

En razón a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, la sentencia consultada debe ser confirmada.

SIN COSTAS en esta instancia por tratarse de consulta de la sentencia.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia consultada del 10 de abril de 2019, proferida por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el presente

proceso, promovido por el señor **JESÚS ARIEL CORRALES GONZÁLEZ**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES**.

SEGUNDO: **SIN COSTAS** en esta instancia.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

La anterior sentencia se notifica a las partes en ESTADOS.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma el acta por quienes intervinieron en la decisión, los magistrados,

FRANCISCO ARANGO TORRES

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **061** del **14 DE ABRIL DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a5ac557b3ee0b9a13e66b579f76d2a8755487425b9ebd2f6b57b0d5fe050692b**
Documento generado en 13/04/2021 02:35:03 PM